

Balance electoral 2018

# Elecciones no garantizan una verdadera democracia

Luis E. Lander\*



NOTICIAS BARQUISIMETO

En este artículo se presentará un apretado balance de la primera de las dos jornadas electorales de 2018, la del 20 de mayo, porque en ella ocurrió la elección presidencial, la más relevante por ser Venezuela un país altamente presidencialista. Por razones de espacio, las elecciones de diputados estatales y las de concejales municipales del 9 de diciembre no serán consideradas

Empezamos el año 2019 con las aguas encrespadas. El 5 y el 10 de enero se ganaron su lugar en la historia. Atendiendo al artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el 5 se instaló la Asamblea Nacional (AN) para iniciar su nuevo período de sesiones, nombrando, con el apoyo unánime de los parlamentarios presentes, a la nueva directiva anual. Recayó la responsabilidad de presidir al joven diputado, militante de Voluntad Popular, Juan Guaidó. Cinco días después, cumpliendo ahora con lo dispuesto en el artículo 231 de la misma Constitución, se juramentó Nicolás Maduro como presidente para un nuevo sexenio constitucional (2019-2025). Pero ese juramento fue hecho ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), violando con ello el mismo artículo 231, que señala que dicha juramentación debe hacerse ante la AN. Ambos eventos y las posteriores consecuencias

que ellos tendrán, están intrínsecamente relacionados con los resultados de las elecciones realizadas el año pasado en el país, muy especialmente la presidencial.

No es suficiente mirar las elecciones para valorar la robustez democrática de un régimen político. Otros componentes entran también al juego: la independencia de los poderes públicos, el respeto a los derechos humanos, la calidad del sistema de justicia, el respeto a la pluralidad política, la honestidad y ética en el manejo de recursos públicos, la libertad de expresión, la erradicación de cualquier forma de discriminación, el amparo a los sectores más vulnerables, resguardo del ambiente, son algunos de los múltiples ingredientes adicionales de cuya salud depende la democracia. En resumen, si bien es cierto que sin elecciones libres no puede haber democracia, el hecho de que haya elecciones no garantiza que un régimen político sea democrático, pues su integridad no es un elemento menor.

Las jornadas electorales ejecutadas en 2018 tuvieron trascendencia ya que sirvieron para elegir a más de 2.700 cargos de elección popular, aproximadamente el 84 % de los cargos públicos que en Venezuela son seleccionados por sufragio universal directo. Además del presidente de la república, el 20 de mayo fueron electos los más de 250 diputados a los 23 consejos legislativos estatales. Y el 9 de diciembre se eligió a más de 2.450 ediles de los 335 concejos municipales del país. Pero desde su convocatoria misma, ambos procesos comiciales fueron objeto de múltiples críticas y observaciones, que terminaron conduciendo a numerosos actores nacionales e internacionales a considerarlas, sobre todo la presidencial, como ilegítimas, desconociendo las consecuencias de sus resultados. Es esa disputa por la aceptación o recusación de estos lo que está en el corazón del encrespamiento con que se inició este nuevo año.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV), como es fácil derivar de su nombre, es una organización que tiene por propósito observar los procesos electorales nacionales para evaluar su calidad, legalidad, transparencia y apego a normas de integridad. Es en cumplimiento de esos propósitos que el OEV, desde su fundación en 2012, ha observado todas las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Observó, además, el proceso fallido de convocatoria a un referendo revocatorio presidencial en 2016.

En total, en apenas siete años, el OEV ha observado más de una docena de procesos electorales. Los resultados de esas observaciones han sido difundidos mediante comunicados e informes públicos (ver [www.oevenezolano.org](http://www.oevenezolano.org).) Apoyándose en los informes que se redactaron, en las líneas siguientes se presentará una evaluación sobre la calidad de la elección del 20M en cuanto a su confiabilidad, equidad y transparencia. Se busca con ello aportar elementos que contribuyan a responder a las interrogantes de muchos sobre qué tan libre e imparcial fue esa elección y, por tanto, cuánto contribuyó, o no, a la superación de la aguda crisis general que se arrastra en el país desde hace ya varios años.

Nuestro sistema político ha sido siempre muy presidencialista, concentrando en el Ejecutivo y el Presidente las mayores cuotas de poder, haciendo siempre que una elección presidencial sea muy relevante. Constitucionalmente estaba paupado para el 2018 la realización de unos comicios presidenciales. En su artículo 230 la CRBV establece que el período presidencial es de seis años. Aunque la anterior elección presidencial se hizo el 14 de abril de 2013, hay que recordar que esa fue una elección sobrevenida por el fallecimiento en marzo del presidente en ejercicio. Ello obligó, cumpliendo con el artículo 233, a la perentoria convocatoria de una elección. Según el mismo artículo, al nuevo electo le correspondía finalizar el período constitucional del faltante, que había sido electo el 7 octubre de 2012, para el sexenio 2013-2018. Así que no hacer elecciones presidenciales el año 2018 hubiese significado una violación constitucional mayúscula. Pero la fecha escogida para su realización sí entró en el terreno de las controversias. La legislación electoral no explicita pautas precisas sobre el mes en que ellas deban hacerse. La tradición venezolana, sin embargo, iniciada con la primera elección presidencial por sufragio universal, directo y secreto, el 14 de diciembre de 1947, apunta a que ellas se hagan en el mes de diciembre del último año del período presidencial. Además, hasta la aprobación en 2009 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que derogó la todavía parcialmente vigente Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, todas las legislaciones electorales anteriores establecían que las elecciones



CNN EN ESPAÑOL

presidenciales debían realizarse en el último mes de diciembre del período presidencial.

De las doce elecciones presidenciales realizadas desde 1947, nueve se hicieron en diciembre. Una de las tres excepciones fue la mencionada de abril de 2013, otra la del 30 de julio de 2000 para ajustarse a la nueva Constitución recién promulgada, y la última –la de 2012–, que se hizo el 7 de octubre por los severos quebrantos de salud del presidente-candidato que, como quedó evidenciado después, le hubiese costado mucho participar en unas elecciones en diciembre.

La forma en que la convocatoria fue decidida, también ha sido terreno de controversias. El 23 de enero de 2018, el constituyente Diosdado Cabello leyó un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que conminaba al CNE a realizar las elecciones el primer cuatrimestre del año. Hay que subrayar que la CRBV y la legislación electoral vigente otorga al Poder Electoral, de manera exclusiva, la potestad de convocar a elecciones. Acatando sumisamente la violación a su independencia orgánica y autonomía funcional (artículo 294 CRBV), el 7 de febrero la presidenta del CNE anunció que esas elecciones se realizarían el 22 de abril, apenas dos meses y medio después del anuncio. Habría que ser extremadamente incauto para aceptar que en esa escogencia discrecional de la fecha, la ANC y el CNE hayan actuado con la imparcialidad que la CRBV ordena.

El único candidato ya anunciado era el Presidente, que buscaría la reelección. Los actores políticos opositores comenzaban a debatir si debían o no participar en ese proceso, valorado por muchos como cargado de irregularidades y, de participar, cuál sería el procedimiento más adecuado para seleccionar candidato. Esto bajo el supuesto inicial de que las elecciones serían a finales de ese año. El adelanto echó por tierra la posibilidad de procesar democráticamente los cruciales asuntos mencionados y favoreció enormemente al candidato presidencial oficialista, iniciándose el proceso con abusivos desfalcos.

En elecciones anteriores a las realizadas en 2017, el anuncio de la fecha de cualquier elección siempre se hizo con al menos seis meses de antelación. Este patrón de anunciar elecciones con brevísimo tiempo de antelación había sido ya puesto en práctica en las tres elecciones de 2017, la elección de la ANC en julio, la de gobernadores en octubre y la de alcaldes en diciembre.

La reducción del tiempo entre el anuncio y la fecha de la elección obligó adicionalmente a comprimir o eliminar actividades, que regularmente están contempladas en los cronogramas electorales. Se eliminaron actividades como los simulacros electorales, los referidos a la tinta indeleble ya que simplemente se decidió prescindir de su uso, las relacionadas con el catastro, con la observación nacional y acompañamiento

internacional, así como la postulación de candidatos por grupos de electores o por iniciativa propia. Otras actividades fueron programadas reduciéndoles, en algunos casos drásticamente, su tiempo de realización. Las distintas auditorías a la plataforma automatizada, que tradicionalmente cuenta con la participación de todos los actores participantes en el proceso y que en 2012 consumieron 55 días, para las elecciones del 20M se redujeron a casi la mitad, 31 días. Los tiempos para casi todas las actividades relacionadas con la postulación de candidatos fueron igualmente cercenados. Mientras en el 2012 las postulaciones podían hacerse a lo largo de once días, para 2018 ese lapso se redujo a cinco. La modificación y sustitución de postulaciones se pudo hacer en 2012 durante 118 días, mientras que en 2018 podían hacerse durante un único día. La admisión de recursos en contra de candidatos de 26 días se redujo nuevamente a solo un día. Esas eliminaciones y reducciones en las actividades regularmente contempladas en los cronogramas no hacían más que erosionar la confianza de muchos actores políticos y sociales, así como de electores comunes, en la calidad democrática de ese proceso.

Para la actualización e inscripción de nuevos electores en el Registro Electoral se fijó en el cronograma apenas veinte días. Hizo pocos esfuerzos el CNE para llamar a nuevos electores a inscribirse y fue muy débil la infraestructura dispuesta para ello. Mención especial merece la manera como se coartó el derecho al sufragio de los cientos de miles de venezolanos que residen recientemente en el exterior. Las sedes diplomáticas no estuvieron a la altura de las nuevas demandas.

En 2018, además de Venezuela, en otros siete países latinoamericanos se vivieron procesos electorales de diversos tipos: Costa Rica, Colombia, México, El Salvador, Paraguay, Brasil y Perú. Colombia, al igual que Venezuela, vivió dos procesos. En esos países la fecha para la realización de las ocho elecciones siempre fue anunciada con al menos nueve meses de antelación, como en Brasil, y llegando hasta diecinueve meses en el caso de El Salvador. Hay una máxima que debería siempre respetarse en procesos electorales: “la democracia necesita tiempo”. Claramente en Venezuela, desde 2017, ese no es el caso.

El primero de marzo los partidos opositores Avanzada Progresista, MAS y Copei, conjuntamente con el PSUV hicieron público un texto que llamaron *Acuerdo de condiciones electorales*. Con ese acuerdo se resolvió, nuevamente con la intromisión de la ANC, posponer las elecciones presidenciales para el 20 de mayo e incorporar al paquete las elecciones de los Consejos Legislativos Estadales y los Concejos Municipales. Pero ese añadido de casi un mes en el cronograma, aparte de alterarlo, poco mejoró y, por



Puntos rojos.

NOTICIAS BARQUISIMETO

el contrario, le agregó nuevas complejidades. Pasó de una elección para seleccionar a un presidente, a elegir más de 2.600 funcionarios públicos. Si bien agregar ese par de elecciones a la jornada del 20M remendaría la ilegalidad cometida en las elecciones de gobernadores y alcaldes en 2017, que en octubre no se eligieron a los diputados estadales ni en diciembre a los concejales municipales, se incurriría en una nueva ilegalidad. En 2017 la separación de las elecciones regionales y municipales violaron lo contemplado en el artículo 2 de la *Ley de regularización de los periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales*, que obliga a realizar la elección de gobernadores conjuntamente con los diputados estadales –elección regional– y la de alcaldes conjuntamente con los concejales –elección municipal–. Pero el artículo 82 de la *Ley orgánica del poder público municipal* establece que las elecciones municipales –alcaldes y concejales– deben estar separadas en al menos seis meses de la elección de órganos del poder nacional. De todas formas, cuando se hizo público el nuevo cronograma para esas complejas elecciones del 20M, las actividades y lapsos para la elección de concejales no estaban incluidas y sin mayor argumentación terminaron nuevamente siendo pospuestas.

Esas elecciones estuvieron además cargadas de otras irregularidades que ya se han hecho rutinarias. A las inhabilitaciones existentes a partidos y potenciales candidatos se agregaron algunas nuevas. Luego de la elección de los alcaldes en diciembre de 2017, el Presidente “sugirió” a la ANC que deberían ser sancionados los partidos que no habían participado en ese proceso. Atendiendo a esa sugerencia, la ANC decretó que

aquellos partidos que no hubiesen postulado candidatos a alcalde debían someterse a un nuevo proceso de validación de su militancia. Una sanción que no estaba contemplada en la legislación y que fue por tanto aplicada ilegal y retroactivamente. Fueron sancionados, entre otros, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Partido Unión y Entendimiento (Puente).

Nuevamente el uso abusivo de recursos públicos en la campaña a favor del candidato-Presidente fue evidente. También la presencia de puntos partidistas, los llamados *puntos rojos*, en las cercanías de los centros de votación fue abrumador; la presión sobre empleados públicos y beneficiarios de misiones sociales fue reiterada, entre otras cosas con el uso del carnet de la patria; hubo un indiscutible desequilibrio en el acceso a medios; abusos con el voto asistido no solicitados. Tanto la observación nacional como la internacional fueron severamente constreñidas en sus capacidades.

La observación de la elección del 20M llevó al OEV, conjuntamente con Provea y Acceso a la Justicia, a introducir ante la Sala Electoral del TSJ una demanda solicitando la nulidad de esas elecciones y de sus consecuencias. Desafortunadamente no fue sorpresa que el recurso fuese desestimado. Sin embargo, lo esgrimido en esa demanda está hoy procesándose por otros caminos.

\* Profesor jubilado de la UCV y director del Observatorio Electoral Venezolano.